



El 14 de mayo en el Río Sumpul

La represión, las masacres y la barbarie, intensificadas desde enero de 1980 en El Salvador, van alcanzando y superando día a día niveles y cotas inimaginables o inconcebibles. Pero ya no hay nada inimaginable ni inconcebible en este país, ni persona o institución intocable, ni niveles de represión y muerte insuperables. Los hechos lo van demostrando, y las evidencias diarias de exterminio sistemático en el campo y en la ciudad, esclarecen cualquier duda que se pueda presentar todavía.

De las zonas más castigadas del país, tal vez la que ha sido más arrasada es el Departamento de Chalatenango, uno de los más pobres, y que limita con la República de Honduras. Noticias y rumores frecuentes, hablan de operativos, de muertes, de destrucción y exterminio, de éxodo masivo de la población rural de Chalatenango. Varios centros de refugio de la iglesia albergan a centenares de gentes venidas de ese departamento, y hablan de la persecución y exterminio de que son objeto.

En el mes de mayo se rumoró varios operativos militares en distintas zonas del país, como en el Trifinio, en el volcán de San Vicente (Amatepec), y en la zona norte de Chalatenango, con gran despliegue de fuerzas militares y armamento pesado, e incluso de haber sido apoyados por la aviación y la artillería. También se habló de la cooperación de los ejércitos de Guatemala y Honduras en dos de los operativos. Sin embargo, la desinformación a que está sometido el país, en parte por el permanente Estado de Sitio, no permitían conocer los sucesos, que eran denun-

ciados por los grupos de izquierda. De pronto, el periódico "Tiempo", de Honduras, habló de la masacre del río Sumpul, y arrojó la cifra de 320 muertos. Pero los gobiernos de Honduras y El Salvador se apresuraron a desmentir tal información, a declararla exagerada y tendenciosa, y gestada por los enemigos sistemáticos de la democracia.

Pero el 19 de junio, el presbiterio y las religiosas de la diócesis hondureña de Santa Rosa de Copán, limítrofe de El Salvador y de la zona afectada, emitieron un **Pronunciamiento** respaldado por 38 firmas, y que días después sería ratificado por toda la Conferencia Episcopal Hondureña. En ese pronunciamiento, además de denunciar los hechos, que son mucho más crueles de los denegados oficialmente en días anteriores, se muestra que es un hecho más dentro de todo un proceso de represión y de persecución sistemáticas. El 14 de mayo está precedido por un largo período de terror, y seguido por otro de amedrentamiento y persecución.

1) Período de terror:

El Pronunciamiento de la diócesis de Santa Rosa de Copán, en el capítulo en el que describe **Los hechos**, comienza con el siguiente párrafo: "Desde Enero pasado, un buen número de salvadoreños, en su mayoría niños, mujeres y ancianos buscan refugio en nuestro país. En su éxodo son hostigados sistemáticamente por la Guardia Nacional Salvadoreña".

No se denuncia un vicio inveterado por años, ni tampoco una conducta posterior simple-

mente al 15 de octubre de 1979. Expresamente se habla de un período que se inicia en enero del presente año, es decir, de una estrategia surgida a partir del gobierno de la Segunda Junta, y protagonizada por la Guardia Nacional.

2) El 14 de mayo:

La barbarie cometida el 14 de mayo (el Pronunciamiento la califica de "masacre" y de "genocidio") sobrepasa ya todos los límites imaginables: más de 600 cadáveres de gente indefensa, mujeres torturadas antes del tiro de gracia, niños de pecho lanzados al aire para hacer el blanco, cinco cuerpecitos de niños en el tapasco de un pescador hondureño; dos helicópteros, cuando menos, la Guardia Nacional Salvadoreña, soldados, y la organización para-militar ORDEN disparando desde las siete de la mañana hasta media tarde; el ejército hondureño cubriendo la orilla propia, con megáfonos hacia territorio salvadoreño mandando no cruzar el río, y devolviendo a los que lo intentaban.

3) Complicidades:

Además de los agentes de la masacre, de parte de El Salvador, se denuncia la complicidad del ejército hondureño, que desde el día anterior había acudido a las márgenes del río Sumpul, y no permitió que los perseguidos penetraran a su territorio. Se agrava esta complicidad por el hecho de que días antes en Ocotepeque se habían reunido altos militares de Honduras, Guatemala y El Salvador, lo que da pie a la sospecha de que la operación fue planeada con el respaldo de los dos países limítrofes. También se acusa a la OEA, pagada por ambos países, que desde hace años vigila la zona limítrofe desmilitarizada, y no debía haber permitido el acceso de las tropas a ese territorio, ni mucho menos permitido semejante delito. Se acusa al gobierno hondureño, y a los partidos políticos y demás instituciones que callan ante la tragedia.

4) Represión y persecución posteriores:

Finalmente, se denuncia que después de esa fecha ha aumentado el número de refugiados salvadoreños en la zona fronteriza, pero en absoluta indigencia e inseguridad, ya que se los amedrenta de que la Guardia los va a exterminar, cosa no imprevisible dadas las penetraciones a territorio hondureño de la Guardia y de un heli-

cóptero salvadoreños. Pero incluso los hondureños que humanitaria y cristianamente han reparado su pobreza con los refugiados son molestados, llamados a declarar, amedrentados y amenazados. Se oculta arteramente la realidad a periodistas extranjeros. Las enfermedades hacen presa en esa población debilitada por el hambre y el sufrimiento.

Los simples datos del **Pronunciamiento** son lo suficientemente sobrecogedores como para hacer un profundo silencio y omitir todo comentario ulterior. El documento hondureño lo que hace, después de describir los hechos, es realizar una breve reflexión cristiana y presentar las exigencias del momento actual a partir de la fe y del más mínimo humanismo. No es un análisis político ni social, sino simplemente una reflexión cristiana que lleva a la acción en favor de los hermanos, aunque sean de otro país, y que no ha solventado las diferencias surgidas de una guerra aún no zanjada. Y para ello acude al Antiguo Testamento (el Exodo), al Nuevo Testamento (San Juan), y a los testimonios más recientes de la iglesia latinoamericana: Mons. Romero y los Obispos latinoamericanos reunidos en Puebla.

Hoy ya no se pueden desmentir los hechos. Ni se puede alegar, como lo hiciera en primera instancia el gobierno de Honduras, que son en su mayoría extranjeros y que no temen denigrar a ese país; todo el episcopado hondureño lo ha ratificado. Ni tampoco servirá para ocultar el gesto del gobierno salvadoreño de llevar periodistas extranjeros, casi un mes más tarde, para que vieran en el sitio que no habían restos de semejante matanza; como dice el documento: "El mínimo de 600 cadáveres sin enterrar fue presa de perros y zopilotes durante varios días. Otros se perdieron en las aguas del río. El río Sumpul quedó contaminado desde la aldea de Santa Lucía". El peso moral de los denunciadores no deja lugar a dudas, al contraponerlo a las amañadas declaraciones oficiales a que estamos acostumbrados. Las investigaciones de testigos, realizadas por la diócesis de Santa Rosa de Copán no dejan lugar a dudas respecto a su denuncia; y el valor de enfrentarse a la posible represión que les venga por su denuncia cristiana avalada con la firma, es un testimonio de veracidad y de espíritu cristiano.

S.M